



:: [portada](#) :: [México](#) :: [Los 43 y la rebelión en México](#)

17-11-2014

Fin al narcoestado

Arsinoé Orihuela

Rebelión

En las redes sociales circula una verdad que sólo algunos incautos se atreverían a objetar: a saber, que "la llama de la insurgencia está encendida". Esta enunciación tiene básicamente dos implicaciones: una, que el país mudó de ánimo, que transitó de la indiferencia a la indignación; y dos, que la llama es sólo eso: una luz momentánea. La primera da cuenta de un estado de humor nacional, precedido por una larga secuencia de atropellos sin reparación, y un sentido de justicia sistemáticamente agraviado. (En cualquier rincón del país se puede escuchar un sonoro iya me cansé!). La segunda indica el carácter volátil y transitorio de ese ánimo. De esta ecuación se desprende una consigna, que coincidentemente circula con el mismo eco en la redes: idesobediencia civil ya! En algo está de acuerdo la mayoría de la población en México, y es justamente en la necesidad de actuar, y preferentemente sin demoras. El sentido de urgencia no es en ningún modo una conjura contra la necesidad de reflexión metódica: es tan sólo el imperativo temporal que nos impone la magnitud de la crisis. Es preciso pensar y actuar. Y pensar y actuar ya. Un día en el presente nacional equivale a decenas de muertos a manos del crimen, la guerra y el Estado.

Y puede ser que la muerte no tenga remedio; que no exista una figura de reparación mínimamente compensatoria para ese daño. Esta es una idea que seguramente a todos nos asalta con cierta frecuencia. Con más razón las muertes no pueden ser en vano. La magnitud del agravio debe traer consigo un desagravio de magnitudes mayúsculas. En México ni siquiera es meritorio de la verdad jurídica: acá la muerte encierra una triple injusticia: la de la criminalización, la de la humillación y la del olvido. La muerte impune y la impunidad letal son las divisas dominantes del *narcoestado* mexicano.

Frenar el estado de horror es la primera tarea

Precisamente el pensamiento y la acción deben abocarse a este primer objetivo. Los crímenes contra los normalistas en Guerrero arrojaron luz sobre un hecho que ahora es incontrovertible: la delincuencia organizada es el Estado, y el *narco* es el jefe supremo de ese Estado. Aún con toda la parafernalia pericial y mediática, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos mantienen firme su tesis: "Se los llevó la autoridad municipal; en complicidad con otra gente, pero se los llevó la policía en unas patrullas, se los llevó la autoridad... Pueden haber mil líneas de investigación pues ya sabemos que en Guerrero te ejecutan, te desaparecen, te asesinan, te encarcelan, te reprimen y no pasa nada. Eso ya lo conocemos nosotros. Pero no queremos que se desvíe la investigación de que los policías se los llevaron, y el Estado tiene que responder por eso. Fue su crimen" (*Proceso* 25-X-2014).

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) refuerza esta hipótesis: "Los misteriosos civiles [a los que presuntamente fueron entregados los estudiantes]... son militares en misión contrainsurgente de paramilitarismo". Otra vez la imputación del crimen es atribuida a la autoridad.



En este sentido, la inferencia es prácticamente una obviedad: la autoridad es responsable de este episodio de horror.

Pero si nos remitimos a los hechos, y a la intuición práctica, descubrimos que esta ocasión de crimen bárbarico no es un incidente aislado. En toda la geografía nacional se presentan situaciones análogas. Y los señalamientos de la población con frecuencia apuntan a la autoridad: efectivos militares, policías, paramilicias al servicio de un poder público o privado, etc.

El Estado no sólo no es garante de los derechos humanos, sociales o civiles: el Estado es el principal transgresor de estos derechos. La suspensión de garantías individuales y colectivas es el oficio no declarado de ese Estado.

Frenar el estado de horror forzosamente implica tomar el asunto de la reparación o procuración de justicia en manos de la población civil. No le podemos seguir pidiendo al verdugo que repare sus crímenes. Decretar el divorcio radical de la sociedad y el Estado es un paso firme en esa dirección.

El Estado -se sostuvo en otra ocasión- "es el responsable de los crímenes en Guerrero por dos razones: uno, porque involucra directamente a personal estatal en los actos represivos-delictivos; y dos, porque el Estado es el facilitador de las empresas criminales, suministrando, a través de las políticas que impulsa, la trama legal e institucional que permite el libre albedrío de los negocios privados, aún allí donde tales intereses particulares entrañan altos contenidos de criminalidad, horror e ilegalidad"

La pregunta, en todo caso, es cómo denunciar e imputar penas categóricas al Estado.

Desmontar el *narcoestado* es la segunda tarea

El renglón jurídico de la lucha o insurgencia es sólo un acercamiento germinal. La insurgencia debe ocuparse de una tarea todavía más compleja: a saber, desmontar el conjunto de relaciones e intereses objetivos que priman en la vida pública nacional. El desmantelamiento del *narcoestado* es el objeto fundamental de esta segunda tarea.

¿Qué es un *narcoestado*?

"Un *narcoestado* es uno donde la institución dominante es la empresa criminal. Los funcionarios de ese Estado están todos coludidos con el narco, pero no por una cuestión de corruptelas personales o grupales, sino sencillamente porque el narco es el patrón de ese Estado. La *narcopolítica* es la



cría de los negocios criminales, creada por y para la empresa criminal. Y con los *narcofuncionarios*, los patrones -la empresa criminal- ganan mucho más. En este sentido, la impotencia o negligencia de las instituciones para perseguir a los delincuentes es la ley natural de un *narcoestado*. El Estado es el brazo legalmente armado de la empresa criminal..." (*La Jornada Veracruz* 17-X-2014).

El *narcoestado* es el modo de organización de los intereses dominantes, y por consiguiente, el facilitador de los crímenes de lesa humanidad que estrangulan al país.

El *narcoestado* se basa en el control de la seguridad y la política, a través del sicariato generalizado, la confiscación de presupuestos estatales y municipales, el financiamiento de campañas electorales, y la infiltración de los negocios criminales al interior de las corporaciones militares y policiacas.

Esta penetración o ensamblaje criminal se traduce en una disminución de *gubernamentalidad* de las instituciones formales. El poder del Estado termina allí donde comienza la vida de la empresa criminal.

En este sentido, desmontar el *narcoestado* involucra por lo menos tres programas de acción: uno, recuperar el control de la seguridad, que es el objetivo de las policías comunitarias y las autodefensas; dos, congelar los procedimientos políticos de representación (boicot electoral), que es la propuesta de Javier Sicilia; y tres, habilitar canales alternativos de gestión de los caudales presupuestarios públicos.

La "llama de la insurgencia" no debe desviarse de esta coordenada fundamental: ¡fin al *narcoestado*!

Blog del autor: <http://lavoynet.blogspot.mx/2014/11/fin-al-narcoestado.html>

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una [licencia de Creative Commons](#), respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.